

**UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES**  
**Exp. 2017-2-9-0001147**

Montevideo, 5 de julio de 2018.

**RESOLUCIÓN 109      ACTA 020**

**VISTO:** Los recursos de revocación y jerárquico interpuestos por MONTE CARLO TV S.A contra la Resolución de URSEC N° 101/2017 del 6 de junio de 2017, y por MONTE CABLEVIDEO S.A. contra la citada Resolución y la Resolución 141/017 de 7 de setiembre de 2017.

**RESULTANDO: I)** Que por las resoluciones recurridas se establecen las pautas y criterios para el contralor de las disposiciones contenidas en los artículo 60 y 61 de la Ley 19.307 de 29 de diciembre de 2014.

**II)** Que las recurrentes fundamentan los recursos interpuestos, esencialmente en los siguientes extremos: incompetencia de URSEC en el caso señalando que se pretende mediante los actos administrativos impugnados, consagrar una reglamentación de la norma legal sin contar con facultades para ello; que tratándose de un acto reglamentario la resolución no cumple con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley; que el Poder Ejecutivo optó por no reglamentar la Ley 19.307 hasta que la SCVJ emitiera pronunciamientos sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas; que el acto es ilegal por ausencia de cronograma de aplicación progresiva dispuesta por los artículos 60 y 61 ni contiene nada que contemple dicha progresividad; que las resoluciones pretenden crear una obligación no prevista por la ley y es la de tener que notificar a URSEC con una anticipación mínima de una semana toda modificación permanente de programación.

**III)** Que, específicamente, en el párrafo 14 del escrito en que fundamentan sus recursos administrativos sostienen textualmente que ... *“Por esta razón, de acuerdo al art. 198 de la ley 19.307, hasta tanto se creen los cargos integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual, la competencia en dicha materia (que, insistimos, fue creada por la mencionada ley) debe ser ejercida por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. No le fue atribuida a la URSEC”,* expresión que, mutatis mutandi, se reproduce en el párrafo 34 de su demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

**IV)** Que las recurrentes solicitan la suspensión en la ejecución de los actos impugnados, apoyada en la teoría del balance, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 15.869.

**CONSIDERANDO: I)** Que URSEC tiene en forma transitoria, y hasta tanto entre en funcionamiento el Consejo de Comunicación Audiovisual creado por

la Ley 19.307 de diciembre de 2014, la competencia para ejercer los controles relativo a lo establecido en los artículos 60 y 61 de la citada norma legal.

**II)** Que a efectos de esa correcta delimitación de las competencias que se ejercerán provisoriamente, debe distinguirse entre una nueva competencia creada por la ley y los aspectos de la misma que se explicitan pero que ya están comprendidas dentro de las competencias genéricas que han sido atribuida a los organismos.

**III)** Que en tal sentido debe precisarse qué competencias tenía atribuida URSEC de acuerdo al régimen jurídico anterior.

**IV)** Que en el caso de obrados el órgano que tenía competencias para el control de contenidos de acuerdo al régimen dado por el Decreto-Ley 14.670 y Decreto 734/78 y dentro de ella la de producción nacional, era URSEC. El citado Decreto preveía el control de la producción nacional en los avisos publicitarios (literal j del artículo 29).

**V)** Que aun cuando la ley regula nuevos aspectos de ese contenido en tanto refiere a la programación musical, ello no puede llevar a concluir que estamos ante una nueva competencia, seguimos estando ante lo que es una regulación de un contenido de las emisiones que eran ejercidas por URSEC.

**VI)** Que, sin perjuicio, la importancia del control que se lleva adelante como medida de aseguramiento del cumplimiento de una obligación de origen legal que amplía las posibilidades de trabajo para los uruguayos y entronca con el necesario desarrollo en su faceta cultural, como medio de efectividad de todos los derechos para todas y todos los habitantes de la República, amerita adoptar todas las medidas tendientes a dotar de la máxima seguridad jurídica a todas las decisiones administrativas en la materia y de que no se comparta la argumentación vertida por las recurrentes en lo que refiere a la competencia de URSEC, elementales razones de certeza jurídica aconsejan, desde el punto de vista de la oportunidad y mérito, hacer lugar al argumento, especialmente teniendo en cuenta que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, entidad entendida como competente por las recurrentes (vide Resultando III), han manifestado su total compromiso con el cumplimiento de lo establecido en la ley.

**VII)** Que, en consecuencia, habrá de modificarse el texto de la Resolución 101 (Acta 021) de 6 de julio de 2017, de modo que el último paso en la adopción de la sanción sea la resolución del asunto por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en línea con lo postulado por las recurrentes, a la que se deberá remitir el expediente con la instrucción completa y el correspondiente proyecto de resolución.

**VIII)** Que, en tal sentido, resulta conveniente remitir las actuaciones a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a fin de que ratifique y haga suyo el procedimiento inicialmente propuesto.

**IX)** Que, en consecuencia, no corresponde en la instancia pronunciarse sobre el resto de los argumentos esgrimidos por las recurrentes, lo que será realizado al momento de resolver los recursos administrativos, retornados que sean los obrados desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

**ATENTO:** A lo expuesto, a lo dispuesto por la Ley 17.296 de 21 de febrero de 2001 normas modificativas y concordantes, y Ley 19.307 de 29 de diciembre de 2014.

**LA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS  
DE COMUNICACIONES  
RESUELVE:**

**1.-** Incorpórase el siguiente texto en el numeral 7 de la Resolución de la Comisión número 101 (Acta 021) de 6 de julio de 2017: *“Una vez concluido el procedimiento administrativo de fiscalización, otorgada la o las vistas administrativas necesarias, informado jurídicamente el expediente y confeccionado el correspondiente proyecto de Resolución, se elevarán las actuaciones a la Comisión a fin de que ésta remita las actuaciones a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a fin de que dicho órgano adopte la resolución en la materia”*.

**2.-** Remítanse las presentes actuaciones a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo a fin de que proceda a la convalidación de lo actuado mediante Resoluciones 101 (Acta 021) de 6 de julio de 2017 y 141 (Acta 031) de 7 de setiembre de 2017, así como por la presente Resolución, debiendo, a tales efectos, la Secretaría General confeccionar versión completa de la Resolución 101 con las modificaciones operadas.

**3.-** Retornadas las actuaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, vuelvan para resolución del recurso administrativo de revocación.

**4.-** Pase a la Secretaría General a sus efectos.